

LA TRANSICION A LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA

James M. Malloy y Eduardo Gamarra

RESUMEN

Los avatares históricos experimentados en Uruguay materialización de la democracia representativa en Bolivia así como la ineficacia y debilidad estructurales de las instituciones que debieran darle sustento constituyen el tema central del presente artículo. A juicio de los autores, la inviabilidad de la democracia en Bolivia obedece en parte importante al hecho de que los partidos no desempeñan un rol de mediación efectivo entre el Estado y la sociedad civil, imposibilitando la agregación de disímiles demandas y, por tanto, el apoyo estable de la segunda hacia el primero. Por el contrario, en la medida en que predominan tendencias caudillistas en los principales líderes bolivianos, la forma en que ejercen la política cotidiana privilegia la manipulación de relaciones clientelistas que terminan por erosionar la viabilidad misma de las instituciones políticas formales. De ahí que los autores subrayan que frente a la tumultuosa interacción y complejas alianzas de civiles y militares, el comportamiento del Estado se ve atravesado por una dimensión perversa, cuya evidencia se encuentra en las demandas que realizan el gobernante patrimonial de turno y su séquito siempre en expansión. Por ello concluyen que por el momento la democracia representativa en Bolivia permanece más como una aspiración que como una realidad.

ABSTRACT

The central subject of this article is the analysis of historical developments relating to the establishing of formal democracy in Bolivia as well as the examination of the structural inefficiency and weakness of those institutions which should support the democratic process. In the authors' opinion, the lack of viability of democracy in Bolivia is largely due to the fact that political parties play no effective role in acting as mediators between the State and Society, thereby making impossible the process of aggregation of divergent demands and thus the stable support from society to the State. On the contrary, to the extent that "caudillista" tendencies prevail among the principal Bolivian leaders, day-to-day politics will encourage the practice of clientelist relations which will erode the very viability of formal political institutions. Thus the authors underline the fact that, faced with tumultuous and complex alliances between civilians and the military, the patterns of behavior of the State will suffer from a perverse dimension, the evidence of which is to be found in the demands made by the particular government in power and its entourage. Their conclusion is that, for the time being, formal democracy in Bolivia is more of an aspiration than a reality.

Como otros países latinoamericanos, Bolivia ha experimentado el ciclo de modelos de gobierno de tipo autoritario represivo y otros organizados dentro del marco de la democracia representativa. Sin embargo, este proceso que empezó a finales de los años setenta, no ha sido en ningún sentido un proceso de redemocratización. El hecho es que, en lo que va del siglo, Bolivia no ha experimentado ningún período considerable de gobierno democrático abierto basado en una amplia

participación ciudadana. La participación popular en la política boliviana, recién empezó con la Revolución de 1952. Desde ese momento y hasta 1978, el país experimentó, por una parte, doce años de gobierno basado en un partido único, aunque utilizando una fachada democrática; y por otra parte, catorce años de gobierno militar autoritario o dictatorial. La vida política nacional boliviana desde 1978 ha estado caracterizada por el caos, en tanto que el país ha sido sacudido por tres elec-

ciones abortivas y por una variedad de regímenes de facto originados en golpes y contra golpes de estado. El actual gobierno civil "democrático", instalado en octubre de 1982, ha tenido muy poca autoridad para gobernar. Es difícil predecir si el gobierno civil democrático será capaz de establecerse firmemente. Pero creemos, que por el momento la democracia representativa en Bolivia permanece más como una aspiración que como una realidad.

Para entender la problemática situación política boliviana, se debe tomar en cuenta la interacción de muchos factores. No obstante, en este trabajo enfatizaremos aquellos factores políticos estructurales que, en su gran mayoría, tienen su origen en el proceso revolucionario iniciado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en abril de 1952. Aun cuando el MNR tuvo control formal como un régimen de partido único por más o menos doce años, la élite de este partido no fue capaz de estructurar ni contener las energías que surgieron con la revolución. De esta manera, en noviembre de 1964, el MNR fue derrocado por un golpe militar. Desde entonces, y hasta 1978, las fuerzas armadas fueron la fuerza política dominante en Bolivia, y de hecho, ellas han continuado siendo un factor determinante en la actual fase de transición.

Al igual que las élites de otros países en vías de desarrollo, la élite del MNR tuvo que lidiar, desde el inicio de la revolución, con dos problemas fundamentales. El primero fue el de definir e implementar un nuevo modo de organizar la vida económica nacional (un nuevo modelo de desarrollo), para de esta manera alcanzar una de las metas básicas establecidas por la revolución: el rápido desarrollo económico. El segundo problema fue el de crear una serie de instituciones políticas para canalizar y controlar demandas y el apoyo potencial de los varios sectores sociales movilizados por la revolución.¹

El liderazgo del MNR tomó como su modelo principal de inspiración, la gran

Revolución Mexicana y particularmente, el modelo de control social elaborado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como consecuencia, es importante señalar, en primer lugar, que desde un principio la élite del MNR no tuvo el propósito de establecer un sistema pluralista competitivo en el sentido clásico de la democracia liberal. Por el contrario, al igual que el PRI, el MNR buscó la implementación de un sistema de Estado centralizado basado en un partido único con control de facto operando bajo una fachada de instituciones democráticas formales.

En segundo lugar, también es importante hacer notar que, como el PRI, el núcleo de la élite del MNR rechazó un modelo de desarrollo socialista de Estado y buscó la implementación de un modelo de capitalismo de Estado en el cual el mercado pudiera operar dentro de un marco de reglas establecidas por el mismo Estado el cual, a su vez, se convertiría en una de las principales fuerzas empresariales. La implementación de este modelo implicó claramente, que los costos de la acumulación de capital inherentes en el modelo tuvieran que recaer, en algún momento, sobre los sectores populares movilizados por la revolución, particularmente en los trabajadores y campesinos. Esta maniobra hubiera sido exitosa si, como se hizo en México, se hubiera movilizado y controlado a estos sectores a la misma vez que se les extraía el excedente económico.²

Se podría sostener que uno de los principales logros de la institucionalización de la Revolución Mexicana fue la marginación política de la izquierda y la incorporación de un movimiento laboral en la estructura corporativista del PRI. Este no fue el caso en Bolivia. En efecto, al aceptar el pedido de fuero sindical hecho por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), el MNR concedió a esta organización sindical un estatus semi-soberano sobre los trabajadores. Al garantizarle a la COB el co-gobierno, el MNR reforzó su

estatus de entidad independiente con carácter cuasi-gubernamental. Las consecuencias de estas acciones fueron substanciales y de larga duración.

En primer lugar, la COB evolucionó como una fuerza independiente fuera del control del partido. Desde esta posición, dicha organización ha venido amenazando, a lo largo de los años, al modelo de desarrollo capitalista de Estado, tanto desde una perspectiva socialista de estado, como más frecuentemente desde una perspectiva populista redistributiva. Más profundamente, desde esta posición, la COB percibió, tanto al MNR como al Estado como fuerzas políticas separadas y esencialmente antagónicas. De esta fonra, la COB se proyectó al Estado, no como una entidad pública articuladora del interés nacional general, sino como una entidad que sólo articulaba los intereses particulares de aquellos grupos que en efecto lo habían capturado. Por extensión, el MNR fue visto no como una alianza de clases que podía llevar a cabo la Revolución, sino más bien como un vehículo por medio del cual clases o grupos particulares podían alcanzar el control del Estado.

En suma, la COB percibió al Estado y por extensión al MNR de dos formas fundamentales: primero, como una entidad extraña que debía ser capturada y utilizada; segundo; como una entidad peligrosa hacia la cual se debía ir en contra para así defender no sólo los intereses de los trabajadores, sino los de la propia COB como autoridad semi-soberana sobre los mismos trabajadores. Las relaciones de la COB con el MNR y con el Estado nacional se asemejaron más a unas negociaciones interestatales que a relaciones intergrupales dentro de una estructura única de Estado. Como tal, en sus relaciones con el Estado y en general con cualquier gobierno, la COB (utilizando la demanda del co-gobierno) se negó a aceptar la mediación del MNR como partido político. Este hecho disminuyó la capacidad del MNR de asumir el rol que le correspondía como me-

diador y constructor de la relación entre los diferentes grupos de la sociedad civil con el Estado en general, y con los gobiernos específicos. También definió un modelo de interacción no mediado entre el MNR y el Estado, el cual fue seguido en los años subsiguientes por otras clases, entidades sectoriales y regionales.

Al final de los años cincuenta, el MNR tuvo conflictos abiertos y violentos con la COB, cuando éste quiso imponer su modelo de capitalismo de Estado. Para aquel momento, Bolivia ya había entrado en el ciclo de las políticas populistas y antipopulistas que venían siguiendo desde principios de la década muchos de los otros países latinoamericanos, especialmente el Perú. Ante estos conflictos con la COB populista, los gobiernos del MNR liderados por Hernán Siles y Víctor Paz Estenssoro, empezaron a reconstruir la institución militar boliviana como una fuente de poder del Estado que serviría para contrarrestar a la milicia trabajadora que apuntalaba el estatus semi-soberano del organismo sindical. Sin embargo, de nuevo y al contrario que el PRI en México, el MNR tuvo un control mínimo sobre los militares y, de esta manera, las revitalizadas fuerzas armadas bolivianas emergieron como una fuente de poder institucional independiente.

Además de estos acontecimientos, el MNR empezó a desintegrarse internamente como resultado del fraccionalismo personalista que comenzó a minar las diferentes unidades organizacionales del partido. Como muchas otras organizaciones políticas bolivianas, el MNR logró el apoyo de la clase media dependiente y burocratizada, mediante el ofrecimiento de cargos y contratos en el sector público. A medida que crecía numéricamente el partido, a consecuencia de los trabajos ofrecidos en el sector público en expansión, el MNR empezó a dividirse en núcleos clientelistas, los cuales fueron formándose alrededor de varios líderes partidistas. De esta manera se fue reforzando el estilo

de **liderazgo caudillista y el fraccionalismo en general. Al final de los años cincuenta las luchas dentro del partido fueron tan intensas como los conflictos entre partidos, clases y grupos.**

Este hecho se evidenció dramáticamente en la Asamblea Legislativa la cual, aunque aparentemente estaba controlada por el MNR, en realidad se había convertido en el lugar donde los conflictos entre las distintas fracciones de partidos se hacían presentes. Esta Asamblea constituyó cada vez menos una fuente de legislación y representación de los intereses de la sociedad civil y cada vez más un mecanismo para la circulación del patronaje y los ataques fraccionales sobre el poder ejecutivo. El MNR, a su vez, fue perdiendo sus funciones de incorporación y agregación de intereses populares y se convirtió en un instrumento de las fracciones, por medio del cual éstas atacaron al Estado. En este contexto, ni el partido ni el Congreso pudieron cumplir con su función de mediar y conectar al Estado con la sociedad civil.

El Estado se asoció casi exclusivamente con el poder ejecutivo. Pero los miembros del MNR en el poder ejecutivo no gobernaron por medio del partido sino a través de sus propias fracciones personalistas. Estas fracciones partidistas fueron intensamente combatidas por otras fracciones del partido y por todos los partidos de oposición.

Todos estos puntos de conflicto y contradicción tuvieron su climax en 1964 cuando el caudillo del MNR, Víctor Paz Estenssoro, tomó la fatídica decisión de manipular la convención del partido y, de esta forma, lograr su reelección como presidente. En este aspecto, la comparación con el caso mexicano es de nuevo instructiva.

En México, el PRI ha sido capaz de contener, en su mayor parte, la política de fracciones y patronaje, mediante la garantía del cambio de miembros del ejecutivo cada seis años. En efecto, se ha

aceptado en México un mecanismo de rotación de cargos y patronaje entre las fracciones de partido; y de esta forma existe una base estable y predecible de gobierno. Esta tradición mexicana no sólo ha reforzado el dominio del PRI, sino que ha inducido a la élite del partido a jugar las reglas formales de sucesión democrática.

Inmediatamente después de la reelección de Paz en 1964, surgieron una gran cantidad de grupos en su contra. La izquierda y la COB se opusieron al modelo de capitalismo de Estado que Paz estaba promocionando. A su vez, las fracciones dentro del MNR que apoyaban a otros caudillos del partido, se sentían frustradas por la incapacidad de Paz de controlar y distribuir cargos a su favor.

Así los militares que actuaron en contra de Paz en 1964 lo hicieron con el apoyo extensivo de grupos y fracciones de dentro y fuera del MNR. Este hecho indicó claramente dos componentes fundamentales del sistema político que se estaba desarrollando en Bolivia. En primer lugar, la intervención militar surgió tanto por el incentivo de las élites políticas civiles como por motivos internos a la fuerzas armadas. En segundo término, fue evidente que existió un compromiso democrático débil para la rotación del poder político entre la élite civil boliviana. De esta manera, dichas élites se encontraban predisuestas a tomar el poder por cualquier medio, es decir, tanto por la fuerza como por la vía electoral.

1. Antipopulismo Militar

El nuevo régimen militar se consolidó rápidamente en torno a la figura carismática del general de las fuerzas armadas, René Barrientos Ortuno, e igualmente, en torno a la menos importante figura del general de ejército, Alfredo Ovando Candia. Barrientos llegó al puesto presidencial, mientras que Ovando ocupó el cargo de Comandante General de las Fuerzas Armadas. Es importante señalar que aunque

aparentemente los militares actuaron como una fuerza institucional coherente, en realidad no hubo tal fuerza y más bien los militares actuaron en apoyo de individuos dominantes o, más bien, caudillos militares. De los oficiales mencionados, el general Barrientos fue el que llegó a dominar rápidamente el nuevo régimen.³

El gobierno de Barrientos empezó por imponer por la fuerza el modelo de capitalismo de Estado que el MNR, desde finales de los años cincuenta, había estado tratando de imponer. Como resultado, Bolivia manifestó la tendencia general hacia regímenes militares anti-populistas, tendencia que se extendió a través de la América Latina en los años sesenta. Los costos del desarrollo fueron impuestos, principalmente, sobre la fuerza laboral organizada. De esta forma, como en los otros casos latinoamericanos, el gobierno empezó a excluir enérgicamente a la fuerza laboral de su anterior posición de poder dentro del Estado, y en general a romper el núcleo de esta fuerza trabajadora.

Al mismo tiempo que reprimía violentamente a los trabajadores, Barrientos buscó la legitimación de su régimen convocando a elecciones y promulgando una nueva Constitución. Indudablemente, el extravagante general logró popularidad entre los campesinos y las clases medias urbanas; consecuentemente Barrientos fue fácilmente elegido presidente en 1966. No obstante, el general fue incapaz de convertir su carisma personal en una base sólida por medio de la cual se pudiera construir una red de instituciones democráticas viables. La Constitución de 1967 articuló una estructura de gobierno que combinó elementos corporativistas clásicos con elementos liberales democráticos. Barrientos controló al nuevo Congreso Nacional a través de un nuevo partido político y de un frente electoral que él mismo había creado para las elecciones de 1966. Sin embargo, estas nuevas instituciones estuvieron al margen del proceso real de gobierno y el partido del presidente se convirtió en una

camarilla personalista que se dedicó al saqueo del Estado y, en este sentido, no se proveyó una base política para lograr un gobierno estable.

Barrientos volvió al modelo clásico de gobierno basado en la manipulación de relaciones clientelistas, las cuales fueron especialmente construidas para cooptar a los líderes claves de la clase media y del campesinado. Este hecho tuvo varias implicaciones importantes. En primer lugar, el estilo de gobierno de Barrientos efectivamente disminuyó la viabilidad de las instituciones políticas formales que tan ostensiblemente él estaba patrocinando. De hecho, la infraestructura política viable continuó desintegrándose durante este período, mientras que el MNR y el frente electoral Barrientista continuaron dividiéndose en una asombrosa serie de fracciones personalistas. El Congreso Nacional, así como las cortes, jugaron un papel marginal en el gobierno, mientras el poder formal de facto, continuó concentrándose en el ejecutivo.

Dado el carácter epifenoménico de las instituciones políticas, la base real de poder del ejecutivo y del Estado fueron los militares. El poder real de Barrientos no recayó en el proceso electoral que se realizó en 1966, sino en su habilidad para mantener el apoyo de los militares, especialmente, del ejército. Debido al hecho de que los militares al derrocar al MNR no se basaron en una doctrina coherente por medio de la cual se pudiera determinar el uso del poder del Estado, Barrientos no gobernó como expresión de la institución militar sino que su gobierno se basó en su propia habilidad para mantener la lealtad personal del cuerpo de oficiales. Para mantener esa lealtad, Barrientos aprovechó el mismo modelo clientelista que estaba utilizando para manipular a las élites políticas civiles.

Durante el período de Barrientos, las fuerzas armadas funcionaron bajo los mismos patrones personalistas clientelistas por los cuales se rigieron las organizados-

nes políticas civiles. El resultado fue similar. La coherencia institucional de las fuerzas armadas fue minada, y los militares empezaron a manifestar el mismo tipo de fraccionalismo centrífugo que dividió a la infraestructura política de la sociedad civil. Aun más, Barrientos se dio cuenta de que, para mantenerse en el poder, tenía que reacomodar constantemente las cada vez más complejas y bizantinas relaciones personales y fraccionales.

Durante el período de dominio de Barrientos (1964-1969), el escenario político boliviano estuvo caracterizado por su extrema complejidad. Sin embargo, fue un período crucial dado que marcó el camino de un estilo propio de gobierno el cual se convertiría en el estilo dominante en los años setenta. Además, este período fue el antecedente de la actual situación boliviana, la cual se ha caracterizado por sus intentos de establecer, al menos, algún tipo de democracia formal.

Bajo la fachada de instituciones democráticas representativas, Barrientos volvió, en efecto, a lo que podríamos llamar un estilo de gobierno neo-patrimonial. Este estilo no sólo subvertió la institucionalización formal del gobierno, fuera del modo autoritario o democrático, sino que también creó tensiones fundamentales entre el Estado y la sociedad civil, especialmente con respecto a la economía.

Siguiendo la lógica implícita del modelo de capitalismo de Estado, Barrientos ostensiblemente buscó estimular al sector privado, fomentando la inversión extranjera y, más importante aún, racionalizando y modernizando la administración del sector público. De nuevo, sin embargo, esta lógica formal "desarrollista moderna", fue minada por la lógica personalista tradicional del patrimonialismo. Esta lógica patrimonial buscó que la expansión del Estado se convirtiera en su elemento central, por medio del cual se pudiese administrar, siguiendo una lógica clientelista en vez de un criterio racional administrativo. De esta manera, hasta la

muerte de Barrientos, la fuerza laboral fue reprimida, y los intereses del sector privado se empezaron a destacar. El Estado permaneció como el factor más importante en la estructuración de la economía boliviana.

2. El Resuigimiento del Populismo

La inaplicabilidad de las leyes y procedimientos constitucionales se hizo evidente en abril de 1969, cuando el general Barrientos perdió la vida en un accidente de helicóptero. El alto mando militar "permitió" entonces, que el Vice-Presidente civil Luis Adolfo Siles Salinas cumpliera con su mandato de Presidente Constitucional. Sin embargo, luego de un corto período de gobierno de no más de cuatro meses, Siles fue derrocado sin miramiento alguno, y el general Alfredo Ovando Candía asumió la presidencia.

Este golpe inició un período fascinante y a la vez turbulento de dos años, el cual merece un análisis extensivo que va más allá de los fines de este trabajo.⁴ Es suficiente puntualizar por ahora que durante los dos gobiernos militares que se dieron durante estos años (General Ovando de septiembre de 1969 hasta octubre de 1970; y el General Juan José Torres de octubre de 1970 hasta agosto de 1971), sorprendentemente Bolivia tomó un rumbo hacia la izquierda claramente influenciada por el régimen militar populista instaurado en el Perú en 1968.

Aparte de los actos dramáticos como la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil Company, estos regímenes se destacaron por finalizar con la represión a los trabajadores de izquierda y por el intento abortivo de movilizar a la fuerza laboral en apoyo a un proyecto militar populista. Para los fines de este trabajo, este período manifestó claramente algunas tendencias nuevas y viejas verdades de la vida política nacional boliviana.

En primer lugar y fundamentalmente, se dio el hecho de que la institución militar demostraba graves tensiones inter-

ñas. Se hizo evidente rápidamente que los militares estaban divididos en una serie de fracciones personalistas y cuasi-ideológicas que competían por el control de la institución para que, de esta manera, se pudiera llegar a controlar el Estado. Ninguno de los dos regímenes representó a las fuerzas armadas actuando como una institución unida. Por el contrario, ambos regímenes giraron en torno a personalidades fuertes que tenían algún control sobre las fracciones personalistas e ideológicas dentro de las fuerzas armadas. Tanto Ovando como Torres tuvieron que lidiar con las coaliciones fraccionales dentro de las fuerzas armadas y defenderse de varios atentados de golpe. Finalmente, ambos cayeron ante las acciones dirigidas por oficiales y fracciones rivales. Al igual que los partidos políticos, las fuerzas armadas se dividieron y cayeron ante el proceso de descomposición que afectaba a todas las instituciones nacionales.

Las acciones de estos dos gobiernos cambiaron el enfoque de la política hacia una de populismo de izquierda pero, al igual que en el Perú, éstos no implementaron ningún modelo socialista de Estado definitivo. Es más, mientras que el cambio de enfoque político enajenaba a aquellos sectores que se habían beneficiado del modelo capitalista de Estado impuesto en el periodo de Barrientos, este cambio de enfoque no produjo una base estable de apoyo para la izquierda.

Bajo Ovando y Torres, la COB y los partidos de izquierda emergieron nuevamente, demostrando que si bien habían sido reprimidos, no habían sido destruidos. En efecto, tan intactas estaban estas organizaciones, que retomaron una posición independiente y alejada de ambos regímenes. Como consecuencia, ni Ovando ni Torres pudieron movilizar y controlar a los sectores populares de izquierda. Como en el período inicial del MNR, la COB rechazó el co-gobierno ofrecido por estos regímenes y asumió una posición independiente desde la cual sólo ofreció un apoyo con-

dicional a ambos gobiernos. De hecho, la COB y la izquierda en general se transformaron en una prodigiosa fuente de demandas presionando a estos gobiernos para que asumieran una posición populista, y establecieron que sólo ofrecerían su apoyo cuando dichas demandas fueran cumplidas.

La falta total de control sobre la izquierda y la COB, se evidenció claramente durante el gobierno de Torres cuando éstas formaron su "Asamblea Popular". Siguiendo en parte la lógica trotskista del poder dual, dicha Asamblea se constituyó como un gobierno separado, la cual representaba a los sectores populares ante el Estado. Aun cuando la fuerza trabajadora de izquierda representó un bloque de poder real en Bolivia, que bajo ciertas circunstancias pudo extraer concesiones de un gobierno débil, ésta no tuvo ni la voluntad ni la capacidad de garantizar un régimen populista y/o de proveer una base de poder para así reorganizar al Estado y asegurar un proyecto ideológico que fuera producido por la misma izquierda.

Torres finalizó atrapado entre las fuerzas de la derecha, las cuales él mismo había alienado (el sector privado, algunos sectores de la clase media, y hasta cierto punto los Estados Unidos), y aquellas fuerzas de izquierda que le habían hecho prodigiosas demandas pero que le ofrecieron poco o casi ningún apoyo real. Cuando ciertos grupos, actuando en nombre de la Asamblea Popular, buscaron movilizar a oficiales jóvenes, particularmente a los oficiales no comisionados para llevar a cabo la transformación radical, se inició un desarrollo importante. Esta amenaza percibida por las fuerzas armadas, fue causa suficiente para forzar cierto grado de coherencia institucional dentro de los cuerpos de oficiales, los cuales ya habían empezado a ver a Torres como un líder débil que podría llevar a la institución militar hacia el mismo tipo de destrucción que se llegó con la Revolución de 1952.

Desde un punto de vista político, el período Ovando/Torres provocó una

clara polarización de fuerzas en la escena boliviana. En la derecha se encontraban las élites del sector privado, una parte substancial de la clase media urbana, y los nuevos intereses regionales de los departamentos del Este, los cuales habían emergido como fuerza política en los años sesenta. Los Estados Unidos, siempre influenciando el acontecer boliviano, respaldó a la derecha, y hasta ese momento, muchas de las fracciones asociadas con el MNR, cambiaron a una postura política de derecha. Es evidente, que desde un punto de vista económico, la derecha quería regresar al modelo de capitalismo de Estado que originalmente había sido implantado por la línea central del MNR, y que luego fue reforzado por los militares en el período de Barrientos. En términos políticos formales, la derecha postuló por una Constitución política que debía estar enmarcada dentro de los lineamientos de una democracia representativa pluralista, la cual debía a su vez combinar conceptos de representación liberales y corporativistas. En términos prácticos, la derecha estaba más inclinada a aceptar un régimen autoritario militar que pudiera implementar su modelo económico preferido.

La izquierda se organizó en una serie de partidos marxistas que giraban alrededor de la COB y la fuerza trabajadora organizada. Para aquel entonces, el campesinado (más del 50 o/o de la población) era aún una fuerza política dividida y desorganizada, la cual era movilizaba tanto por la derecha como por la izquierda. En esta etapa la izquierda no tenía proyectada ni clarificada ninguna alternativa al modelo económico de la derecha. Algunos sectores postulaban proyectos populistas nacionales mientras otros proferían alternativas socialistas. Esta confusión ideológica y programática debilitó a la izquierda. En términos políticos, la Asamblea Popular discutió un modelo alternativo de democracia directa; pero en términos prácticos, la izquierda también estuvo inclinada a aceptar algún tipo de régimen militar auto-

ritario.

Para aquel entonces, cualquier alternativa democrática real estaba fuera de toda discusión simplemente porque ninguno de los intereses de la sociedad civil percibía a un régimen democrático como útil para sus intereses. El poder real permaneció en los militares y, la pregunta central que se planteaban los diversos grupos y partidos políticos fue: ¿a qué sector apoyarían los militares? Dicha pregunta fue respondida en agosto de 1971, cuando un levantamiento militar se desencadenó en el departamento oriental de Santa Cruz. Claramente apoyado por la derecha, el movimiento movilizó rápidamente al resto de la fuerza militar, y luego de una serie de enfrentamientos sangrientos, Torres fue derrocado el 21 de agosto de 1971.

3. Neo-Patrimonialismo

El levantamiento de agosto de 1971 llevó al poder al coronel Hugo Banzer Suárez. Con mano dura, el diminuto Banzer gobernó a Bolivia por más de siete años. El período de Banzer coincidió con un lapso relativamente largo de crecimiento y prosperidad. De esta manera, el régimen de Banzer puede ser justamente calificado como el de mayor impacto sobre la economía política boliviana en relación a cualquier gobierno desde la Revolución. De inmediato el "Banzerato" estableció el escenario político y económico sobre el cual Bolivia ha escenificado el drama de su "retorno a la democracia".

A diferencia del golpe de 1964, el cual fue dirigido básicamente contra un individuo (Paz Estenssoro) y su fracción, la acción de 1971 tuvo el claro propósito de aplastar el poder político de la fuerza trabajadora de izquierda y de hacer de Bolivia, un país propicio para el sector privado. Dada la profundidad de la posible amenaza por parte de la izquierda, percibida especialmente por parte de los militares, el nivel de represión dirigido en su contra fue sin precedentes. El nivel de vio-

lencia sangrienta y represión fue tal, especialmente en los días inmediatos al golpe, que la izquierda y la fuerza trabajadora fueron intimidadas. Estas acciones dejaron un legado amargo, de odio, que ha envenenado la atmósfera alrededor de la cual se han dado todas las subsiguientes tentativas en busca de la democracia.

En muchos aspectos, el régimen de Banzer fue parte de la corriente general de regímenes autoritarios de "orientación derechista", que se desarrollaron en la América Latina durante las décadas de los sesenta y setenta. Además, el régimen en algunos niveles se caracterizó por ser lo que algunos han visto como un nuevo tipo de autoritarismo, llamado el "régimen burocrático autoritario".⁵

El régimen se basó, al menos en parte, en una alianza constituida por aquellos militares de orientación desarrollista y algunos jóvenes tecnócratas provenientes de la sociedad civil. Bajo el poder de este grupo, Bolivia fue llevada firmemente por el camino del capitalismo de Estado. Al igual que en el Brasil y otros países, el régimen aseguró el modelo capitalista de Estado mediante la enérgica exclusión de la izquierda y la fuerza laboral de la vida política; y, además mediante la fuerte imposición de los "costos" del modelo sobre los trabajadores y el enorme y tradicional campesinado indio. Paralelamente, los intereses empresariales del sector privado lograron acceso irrestricto al régimen y, este sector junto con la clase media urbana fueron los principales beneficiados del desarrollo que ocurrió.

Sin embargo, la similitud con el tipo de régimen "burocrático-autoritario" fue bastante superficial e imitativa. Una de las características principales de este tipo de régimen es su desarrollo como régimen burocratizado basado en una fuerza militar institucionalizada, la cual conlleva un sentido de misión relativamente coherente. Esto no se dio en el caso de Bolivia bajo Banzer. Ciertamente, una de las ironías del caso boliviano fue que, aun

cuando Bolivia experimentó cierto desarrollo económico, al mismo tiempo sufrió un retroceso político. Si lo que se llama desarrollo político envuelve, al menos, la articulación y coordinación de una variedad de instituciones modernas, se puede afirmar que Bolivia, durante la década de los setenta, realmente pasó por un momento de decadencia política. Este proceso de decadencia ya había empezado en los años sesenta y, como dijimos, se vino a completar en los setenta bajo Banzer. Este es un hecho que es básico si se quieren entender las inmensas dificultades por las cuales ha tenido que pasar Bolivia al tratar de construir un sistema democrático.

En un comienzo, Banzer buscó que su régimen se basara en tres pilares de apoyo: el sector privado, representado por miembros claves nombrados al gabinete ministerial; los militares y una aparente gran alianza entre la centro-derecha del MNR dirigida por Paz Estenssoro y su rival más viejo y amargo, la Falange Socialista Boliviana. Aparte de la base de apoyo militar, la coalición parecía dar al régimen una red de vínculos políticos estables e institucionalizados con la sociedad civil a través de los dos partidos más importantes de la nación.

En 1974, sin embargo, Banzer expulsó a los dos partidos y abiertamente basó su gobierno en los militares. Tras el colapso de la coalición se pueden observar algunas realidades importantes. En su trato con los partidos, Banzer descubrió que éstos eran fracciones que representaban poco más que camarillas, cuyo propósito principal era el de reclamar cargos dentro del sector público. Aún más, en esas circunstancias, las élites de los partidos actuaron como intermediarias en el flujo del patronaje. Es decir, ellas construyeron su propia base de apoyo que fue entonces indirectamente entregada a Banzer. Como siempre, las fracciones no envueltas en el reparto, rompieron con el cuerpo principal de cada partido y comenzaron a apoyar a la oposición. En suma, mientras dre-

naban recursos, los partidos políticos ofrecieron poco en términos de apoyo y realmente contribuyeron al desarrollo de la oposición.

Al expulsar a los partidos políticos, Banzer eliminó al intermediario y centralizó la ley del patronato en sus propias manos. Al hacer esto, afirmó también, que bajo la superficie el principal modo de gobierno recaía sobre la manipulación bizantina de redes clientelistas, que tenían sus raíces en la clase media dependiente que continuaba viendo al Estado como la base primaria de su bienestar. La lógica del clientelismo fue tal que el régimen de Banzer —a pesar de su apariencia moderna— constituyó, en términos prácticos, una versión contemporánea del modo tradicional de gobierno al cual Weber llamó patrimonialismo.

Bolivia, durante este período, bien podría ser descrita como una sociedad "neo-patrimonial" buscando el crecimiento bajo un modelo económico "neo-mercantilista" de Estado centralizado. El hecho es que, tanto la vida política como económica giró en torno al Estado central, no como un sector público que expresara algún concepto abstracto de nación, sino como la extensión particularista de un poder ejecutivo expresado en el poder personalizado de Banzer como una especie de cuasi-príncipe moderno.

El neo-patrimonialismo trajo consigo una serie de dinámicas políticas y patrones de división que atravesaron y a veces subsumieron dinámicas más modernas; específicamente, las secuencias de dinámicas personalistas patrón-cliente, que a menudo eran más importantes o por lo menos tan importantes, como las dinámicas modernas de grupo, clase e ideología. Esto no quiere decir que las dinámicas modernas no hubieran existido sino que Bolivia encarnaba el llamado efecto de "museo viviente" donde lo moderno y lo tradicional se mezclaron en patrones complejos y densos de división y conflicto. Bajo Banzer, las dinámicas neo-patrimoniales más

frecuentemente proveyeron la lógica interna central y establecieron el tono para todo el sistema.

Las complejidades de esta situación se evidenciaron en las relaciones de Banzer con el sector privado y en la relación entre el Estado y la sociedad civil en la fórmula Estado/Capitalista. En primera instancia, está claro que Banzer garantizó algún tipo de capitalismo en Bolivia y que el sector privado se benefició durante su gobierno. Pero sería incorrecto describir a su régimen como dominado por alguna burguesía de intereses nacionales o internacionales o como la expresión de los intereses coherentes de una clase capitalista real en Bolivia.

El hecho es que en aquella etapa, una clase capitalista, en el mejor de los casos, era incipiente. Al igual que con todo lo demás, Banzer construyó relaciones no con una clase como tal sino con individuos y grupos que se convirtieron en sus partidarios personales. Elementos del sector privado se beneficiaron en base al acceso personal que tenían al ejecutivo y/o por el pago de "coimas", comisiones u otras "tarifas" patrimoniales por concepto de concesiones, contratos, préstamos de bajo interés, etc. A medida que pasaban los años, Banzer fue abandonando el apoyo entusiasta a la "clase capitalista" como tal: primero, porque su estilo de gobierno disminuyó la habilidad del sector privado para formar y actuar como clase; en segundo lugar, porque aquellos elementos del sector privado que no estaban ligados a las redes de patronaje llegaron a resistir y a oponerse a Banzer. La cuestión es que en las relaciones del Estado con el sector privado el tema fue similar a aquel que prevaleció en todos los aspectos de la sociedad boliviana: modelos abstractos y modernos para vincular a grandes números de ciudadanos a través de instituciones coherentes capaces de actuar como tales cedieron ante la división y el particularismo, reflejando la dinámica subyacente de un patrón-clientelismo personalizado.

Debido al estilo neo-patrimonial de gobierno bajo Banzer el proceso de desinstitucionalización continuó aceleradamente. El clientelismo continuó invadiendo a la institución militar, socavando su vitalidad institucional y minando su coherencia organizacional.⁶ En este sentido, al importar el conflicto político social al interior de la institución, los militares pagaron caro su rol de represores de la actividad política en la sociedad civil. La cuestión es que para mediados de los años setenta, Banzer gobernó casi exclusivamente a través de la manipulación de complejas alianzas de fracciones civiles y militares. Como resultado, su permanencia en el poder fue siempre tenue y Banzer tuvo constantemente que enfrentarse a los intentos de golpe por parte de fracciones militares y civiles rivales.

El modelo neo-patrimonial de gobierno también originó contradicciones en el modelo económico de capitalismo de Estado. Lo que se desarrolló en Bolivia fue un estilo de capitalismo-prebendal en el que, a pesar de beneficiarse capitalistas individuales, el Estado quedó cada vez más fuera de la lógica del capitalismo moderno.

Dadas las dinámicas clientelistas inherentes en cualquier tipo de gobierno neo-patrimonial, su lógica interna empuja en dos direcciones: a) el gobernante debe constantemente expandir sus redes de apoyo, consecuentemente, debe expandir la fuente de recursos de patronaje, y b) el Estado central se convierte en la principal fuente patrimonial y el ejecutivo tiende cada vez más a ver al Estado, no como un fenómeno público, sino como a un recurso personal para mantener su gobierno. De esta manera, existe una tendencia por parte del Estado a expandirse en tamaño y a incrementar las funciones que realiza; y, a la vez, el comportamiento del Estado viene a reflejar más las necesidades políticas personales del gobernante y su séquito, que cualquier enfoque moderno de normas legales y racionales.

Así mientras el Estado en realidad

garantiza la reproducción del capitalismo al "disciplinar" e imponer los costos de la acumulación de capital sobre la fuerza laboral y sectores populares, su propia necesidad de mantenimiento inevitablemente pone al Estado en conflicto con el sector capitalista, en cuanto a la cuestión de la apropiación del excedente económico producido. Además, las "irracionalidades" introducidas en el comportamiento del Estado, debido a la lógica del gobierno neo-patrimonial, crean problemas para los sectores capitalistas ya que introducen incertidumbres en el sistema y aumentan los costos de hacer negocios en una variedad de formas.

Debido a la gran necesidad de mantener el modelo de gobierno neo-patrimonial, la cuestión central es que el Estado se va convirtiendo en una realidad parasitaria en relación con los sectores productivos capitalistas y, en general, con la sociedad civil. Además, aquellos componentes de la sociedad civil y del sector capitalista que participan de las prebendas producidas por el Estado, también pasan a formar parte del peso parasitario de un Estado cada vez más arbitrario. En un contexto como el boliviano, el neo-patrimonialismo introduce una dimensión rapaz en la conducta del Estado a través de las demandas que el gobernante patrimonial y su séquito, siempre en expansión, hacen a la sociedad.

Durante los siete años del gobierno de Banzer, el patrón antes descrito prevaleció en la relación entre Estado y sociedad. El hecho es que el Estado bajo el régimen de Banzer, creció en tamaño, peso e impacto económico a un grado sin precedentes en la historia boliviana. La burocracia pública aumentó de 60,000 empleados en 1970 a 170,000 en 1977. En este mismo lapso de tiempo nuevas agencias y corporaciones proliferaron hasta llegar a más de 120 agencias centrales gubernamentales y 50 compañías públicas.⁷ El Estado llegó a impedir el crecimiento de todos los otros sectores y actividades combinadas.

El conflicto entre el Estado y el sector privado se manifestó, en primer lugar, en el ámbito de la minería. Un número considerable de compañías de la mediana minería, protestaron en contra de un sistema de impuestos confiscatorios mediante el cual la industria minera (un sector productivo clave) subsidiaba en efecto al Estado y a otros componentes del sector privado, particularmente a la banca, el comercio y a la agro-industria en los departamentos del oriente boliviano como Santa Cruz. Este problema suscitado por el sector privado evidenció las dinámicas aun más profundas que durante ese período se encontraban en proceso.

Desde los tempranos días de la Revolución, los gobiernos bolivianos han perseguido una estrategia de "integración nacional" que significó principalmente la integración de los llanos orientales a la nación. Una consecuencia de esto, fue la transferencia del poder económico y político de las altiplanicies occidentales densamente pobladas, que dependían de la agricultura tradicional campesina y la minería, a los llanos del oriente que dependían cada vez más de la agro-industria moderna y los hidrocarburos. Efectivamente, uno podría argumentar, (muchos lo han hecho) que las políticas de desarrollo nacional capitalista de Estado, en Bolivia, significaron una transferencia de capital y recursos del altiplano al llano equivalente a una rapiña descapitalizadora del primero en favor del segundo.⁸

En los años setenta, el oriente, especialmente Santa Cruz, surgió como una fuerza política y económica significativa. No fue casualidad que el golpe de 1971 comenzara en Santa Cruz y que Banzer mismo fuera cruceño. Es más, a esta región del país llegaron una cantidad substancial de inversiones, especialmente en forma de préstamos de toda clase exceptuando préstamos concesionarios. Además, Santa Cruz dirigida por un poderoso comité cívico basado en el sector privado, fue capaz de capturar una cantidad importante

de las ganancias generadas por la producción de hidrocarburos en ese departamento, disminuyendo, de esta manera, los recursos que iban al tesoro nacional.⁹

Como quiera que hayan sido las complejas realidades de las transferencias entre regiones, el hecho es que el surgimiento de Santa Cruz introdujo una poderosa y discordante fuerza regionalista en la escena política nacional. Además, el "comité cívico" de Santa Cruz se convirtió en un ejemplo poderoso para el resto de departamentos que siguieron la corriente formando comités similares, los cuales tomaron la delantera en las presiones regionales sobre el Estado central. Otra variante particularista fue introducida y, el gobernante neo-patrimonial, buscó manipular y contener al nuevo regionalismo a través del mismo clientelismo prebendal que había utilizado para lidiar con la variedad de particularismos que presionaban al núcleo nacional.

Este no es el lugar para discutir en detalle la política económica de Banzer. Al igual que muchos otros países de la América Latina, Bolivia gozó de una era de prosperidad. Como es común en las economías basadas en la exportación extractiva, una mentalidad "boom" prevaleció y debido a ella, los recursos se desviaron hacia la producción agro-industrial especulativa, construcciones de lujo, y al consumo. Este crecimiento, impulsado por precios favorables para minerales y petróleo, permitió que ambas industrias produjeran ganancias a pesar de que la producción estaba declinando. Las ganancias de exportación fueron sustituidas a través de préstamos externos garantizados por el gobierno, el grueso de los cuales fue orientado hacia el mantenimiento del Estado, préstamos para las actividades agrícolas-especulativas, el pago de importaciones y la fuga de capitales.

La cuestión es que el crecimiento y la prosperidad en Bolivia durante los años setenta, fue extremadamente superficial. Cuando la economía internacional cambió.

los pilares de la economía boliviana se derrumbaron: las actividades agro-industriales y de la construcción decayeron, dejando como secuela un elevado saldo deudor. La caída de los precios internacionales del estaño puso al descubierto, inmediatamente, las debilidades estructurales de los sectores mineros y petroleros. Para finales de los años setenta, la economía entró en un período de descenso del cual todavía no se ha recuperado, y de aquella etapa del "boom" quedó poco, con excepción de la masiva deuda externa.

De alguna manera, el legado político de estos años fue aún más dramático. Las organizaciones populares y laborales fueron reprimidas, aunque no eliminadas, y hubo una creciente polarización de la sociedad entre las clases sociales, en relación a la cuestión de la definición de ganadores y perdedores en el contexto de modelos de desarrollo alternativos. La división de clases quedó inmersa en una situación de intensas fuerzas centrífugas provenientes de fisuras regionales y de otros tipos de divisiones particularistas, las cuales se desplazaron a lo largo de los lincaamientos de clase. La infraestructura formal a nivel político e institucional, se encontraba en una situación de extrema debilidad, siendo mucho más que un mero epifenómeno de la compleja confrontación entre fracciones políticas clientelistas articuladas en torno al ejecutivo, en un juego de posiciones transitorias. En consecuencia, todas las clases, segmentos, regiones y fracciones, llegarían a percibir al Estado como una entidad ubicada por encima y en contra de la sociedad y que por lo tanto, podría ser asaltado, capturado y utilizado para el beneficio privado.

4. Descompresión y retirada del autoritarismo

A finales de los años setenta, siguiendo la corriente general imperante en la región, Bolivia nuevamente empezó la transición de un régimen autoritario de

hecho a un sistema democrático formal. El proceso comenzó con la convocatoria a elecciones por Banzer para julio de 1978. Existieron un sinnúmero de razones para la acción de Banzer, incluyendo la tendencia regional, las presiones por parte del gobierno de Carter, y la amenaza de la crisis económica. Subyacente a esas razones, sin embargo, se dio el hecho de que, en una situación económica problemática, el juego bizantino de política clientelista estaba resultando cada vez más difícil de controlar. Además, el gobierno de Banzer era cada vez más inestable debido al hecho de que en el juego de posiciones políticas transitorias, cualquier intento de formación de una alianza entre las fracciones internas, inmediatamente provocaba el resurgimiento de una contra-coalición que conspiraba con el objeto de tomar el poder por cualquier medio, incluyendo golpes de Estado. Existe abundante evidencia que prueba que el poder de Banzer sobre los militares era particularmente débil, y que una variedad de fracciones estaban conspirando contra él. De manera que Banzer, en efecto, estaba buscando una nueva fórmula sobre la cual reconstruir su poder, y tal vez, relegitimar su régimen, tanto al nivel nacional como internacional.

En Bolivia, la transición hacia una democracia formal se convirtió en un proceso tumultuoso de cuatro años caracterizado por un ciclo de elecciones, golpes de estado y nuevas elecciones. A lo largo del proceso, los líderes políticos bolivianos idearon una serie de propuestas formales, legales y constitucionales con el fin de encontrar soluciones momentáneas a la cuestión del poder. Aparte de cuestiones ideológicas a largo plazo, la cuestión de la democracia en Bolivia estuvo estrechamente relacionada con el más inmediato pero difícil problema de quién y cómo iba obtener el poder. La democracia formal pasó a ser una respuesta posible más a la pregunta de cómo se iba a mantener el poder. Lo importante es que para la mayoría de los grupos e individuos claves de Bolivia,

el problema central no fue la democracia en sí, sino el acceso al poder.

La dinámica política del período 1978-1982 evidenció aspectos importantes de la conducta y valores de las élites políticas bolivianas pertenecientes a cualquier posición. Dichas élites políticas no impulsaron el movimiento democrático por razones de compromiso para con la democracia como sistema político; más bien, la democracia como sistema político constituyó una respuesta, quizás temporal, al problema de acceso amplio al poder y de circulación del patronaje estatal luego de siete años de monopolio autortario por parte de Banzer y su séquito. Para algunos, este acceso significó la solidificación de los logros de clase o grupos, o el levantamiento de las cargas impuestas; para otros, dicho acceso representó una cuestión de presión de intereses por parte de regiones específicas o de sectores económicos; y aun para otros más, tal acceso político no significó más que una cuestión de circulación de cargos y patronaje, por medio de la substitución de un patrón patrimonial central por otro.

La cuestión es que, mientras que un proceso electoral democrático abría, y teóricamente racionalizaba la cuestión del acceso al poder, éste representaba para muchos —si no para todos los jugadores— una opción secundaria. Prácticamente cada fracción y grupo importante demostró, en los cuatro años subsiguientes su voluntad de apoyar un golpe de Estado si este parecería proporcionar una vía rápida y segura al poder o si por otra parte estos grupos veían la posibilidad de perder en una campaña electoral democrática. En Bolivia, los votos electorales todavía eran vistos tan sólo como una moneda política sin mucho valor, todos los grupos políticos estaban dispuestos en cualquier momento a cambiar dicha moneda por balas en el mercado del intercambio de poder.

El carácter patrimonial del sistema quedó realmente evidenciado cuando casi inmediatamente después de anunciar su

intención de convocar a elecciones, Banzer perdió el control de la situación. En efecto, los gobernantes neo-patrimoniales sólo tienen poder mientras son capaces de monopolizar activamente los sistemas de poder; de hecho, un político patrimonial derrotado es muy débil. Al contrario que en el Brasil y el Perú, en Bolivia, la fuerza militar no tuvo la capacidad organizacional necesaria, ni para llenar el vacío político, ni para controlar el proceso de transición. De esa forma, al mismo tiempo que el centro patrimonial sufría un proceso de descompresión, su control disminuía y su poder se disgregaba en una cantidad de fracciones, regiones, sectores y clases, las cuales luchaban entre sí para tratar de alcanzar algún tipo de control formal sobre el Estado. En esta situación, los diferentes grupos y fragmentos políticos buscaron simultáneamente, tanto estrategias electorales viables, como posibles coaliciones golpistas. Los militares críticos debido a su control de los instrumentos coercitivos, titubearon y, de hecho, se dividieron ante las presiones de las élites civiles que trataban de lograr el apoyo de la institución militar. Así mientras que los oficiales militares permanecían como las figuras centrales en todo el sistema político, la institución militar como tal se iba desintegrando en una colección de fracciones armadas de carácter cuasi-feudal, agrupadas en torno a posibles hombres fuertes patrimoniales.

Antes de la primera contienda electoral en 1978, fracciones dentro de las fuerzas armadas rechazaron a Banzer como candidato e impusieron al General Pereda Asbun en un claro intento de legitimar un sistema patrimonial, con un nuevo líder, bajo la tutela de los militares. Sin embargo, la estrategia de llevar a cabo un proceso electoral, obligó a los militares a terminar con la represión que se mantenía contra la fuerza trabajadora de izquierda, la cual surgió nuevamente y en esa situación polarizada se convirtió en una amenaza electoral. No sólo resurgió la fuerza laboral de

izquierda dirigida por Juan Lechín, sino que también surgieron todos los antiguos partidos políticos, incluyendo el dividido MNR y sus viejos caudillos, como Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y Walter Guevara Arce. En lo que a protagonistas políticos se refiere, el largo período de dominación militar autoritario causó poco impacto sobre la escena política.

La debilidad del poder central se evidenció en las elecciones, las cuales los militares abiertamente trataron de controlar por medio del fraude. Sin embargo, ni los militares, ni el propio régimen fueron capaces de dominar el proceso, y la capacidad de controlar el fraude se disipó hacia afuera cuando todos los partidos se vieron envueltos abiertamente en algún tipo de fraude electoral. Frustrados ante la incapacidad de llevar a Pereda a la presidencia, de modo fraudulento, las fracciones que le apoyaban anunciaron un golpe, y de hecho, destituyeron a Banzer e instalaron su propio candidato en el "palacio quemado". Casi inmediatamente después, fracciones militares rivales empezaron a conspirar contra Pereda, y finalmente, el 21 de noviembre, la llamada coalición militar "institucionalista" expulsó a Pereda, e instaló en su lugar al general David Padilla Arancibia. Buscando el retiro total de los militares del poder formal pero sin producir una situación de desorden, los institucionalistas, actuando a través de Padilla, convocaron a una nueva ronda de elecciones generales para julio de 1979.

El proceso electoral de 1979 reveló, en forma dramática, hasta qué punto había llegado la situación política boliviana. Los militares sólo mantenían el control formal y nominal de la situación. Como resultado, hubo un real vacío de poder en el centro político. Así, mientras se buscaba algún tipo de salida política, los diversos grupos, clases y fracciones fueron dejados sin control. Con respecto a los protagonistas del juego político, se podría decir que en los 12 años precedentes no se dio la eliminación de grupos o fuerzas personalis-

tas sino que más bien surgieron nuevas. Como resultado, no hubo ningún componente de la sociedad civil capaz de fraguar una base por medio de la cual se pudiera dominar el sistema.

Además del dilema político de encontrar un nuevo régimen viable, Bolivia y sus líderes confrontaron una crisis económica que aumentaba paulatinamente. En cierto modo, la crisis política estuvo alimentando la crisis económica, dada la falta de un gobierno con autoridad suficiente para actuar. Al mismo tiempo, las consecuencias obvias de cualquier intento firme de enfrentarse con la crisis económica, alimentaron la escena política y limitaron las posibilidades de actuación de todos los contendientes. Aun cuando ambas dimensiones interactuaron y se reforzaron, el hecho fue que algún tipo de resolución política tenía que surgir como la condición sine qua non de cualquier capacidad realista de lidiar con la crisis económica.

Sean cuales fueran las diferencias ideológicas, las diferentes fuerzas políticas empezaron a configurarse en torno a tres personalidades fundamentales que luchaban por la silla presidencial, Hernán Siles Zuazo formó una amplia coalición de centro-izquierda, la Unión Democrática y Popular (UDP), formada por la fracción de izquierda del MNR (llamada MNRI), por un grupo de jóvenes independientes de izquierda llamado el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), por el Partido Comunista Boliviano (PCB) y otros grupos minoritarios. A la izquierda de la UDP se situaron una cantidad de diferentes grupos de izquierda. En la derecha quedó Paz Estenssoro liderando una coalición tentativa de fracciones del MNR, llamada el MNR histórico (MNRH), mientras que Banzer volvió a la contienda, a la cabeza de un nuevo partido llamado Acción Democrática Nacionalista (ADN). En este contexto, mientras Siles mantuvo una idea vaga de populismo nacional, Paz y Banzer apoyaron la idea de volver a

poner en vigor el modelo económico del capitalismo de Estado.

El voto popular fue indeciso pero reveló a un electorado totalmente polarizado entre la derecha y la izquierda. Siles logró una mayoría relativa, pero el hecho de no haber logrado una mayoría absoluta, significó que el Congreso Nacional, recientemente elegido, determinaría quien sería el futuro presidente. Debido al sistema de representación proporcional, el Congreso estaba dividido en una serie de grupos y fracciones que fueron incapaces de lograr una mayoría absoluta en favor de los tres candidatos principales: Siles (33 o/o), Paz (28 o/o) y Banzer (19 o/o). Después de varias votaciones, las fuerzas políticas mayoritarias llegaron a un acuerdo por medio del cual el viejo partidario incondicional del MNR, Walter Guevara Arce, pasaría a ser, por el lapso de un año, presidente interino de Bolivia.

El compromiso que llevó a Guevara a la presidencia demostró claramente que el sistema no estaba capacitado para lograr soluciones a largo plazo para los problemas políticos fundamentales. En consecuencia, las diferentes élites políticas se limitaron a encontrar soluciones a corto plazo para los problemas específicos. Guevara trató de unir las distintas fracciones del MNR en una gran coalición, para de esta forma, reforzar su régimen, pero los partidarios de Siles y de Paz, preocupados por la próxima elección, estuvieron poco dispuestos a apoyar un gobierno que ellos no eran capaces de dominar. De esta manera, ambos prefirieron mantenerse en la oposición. El resultado fue que el Congreso Nacional, que había elegido a Guevara, se puso casi inmediatamente en su contra. Guevara pasó a ser una figura débil incapaz de enfrentar la deteriorada situación económica. La salida política que dio como resultado el nombramiento de Guevara, no produjo un gobierno capaz de actuar decisivamente.

La superficialidad de la lealtad a la democracia, por parte de las élites polí-

ticas, se manifestó en los meses subsiguientes. Casi inmediatamente después de la decisión de llevar a Guevara a la Presidencia de la República, las fracciones civiles empezaron a complotar casi abiertamente con las fracciones militares, con el fin de llevar a cabo un golpe de Estado. Efectivamente, en una verdadera contienda verbal por parte de los políticos que reveló su capacidad para jugar con los formalismos, se habló hasta de un golpe "constitucional", en el que el Congreso podría apoyar y legitimar a un nuevo gobierno de facto. Existe evidencia que los políticos y líderes de todo el espectro político estuvieron envueltos en conspiraciones golpistas.¹⁰

En el mes de noviembre, estas conspiraciones tomaron forma activa cuando el coronel Alberto Natusch Busch llevó a cabo un golpe. Nuevamente, la evidencia indica que Natusch pensó que recibiría amplio apoyo por parte de grupos civiles en el Congreso y del movimiento laboral (sindical).¹¹ Guevara rehusó entregar el poder, y por varios días, tanto Guevara, como Natusch, esperaron que el Congreso se decidiera a legitimarles sus respectivos reclamos a la presidencia.¹² Mientras el Congreso ponderaba la situación, Natusch al no recibir apoyo popular, lanzó a sus indisciplinadas tropas a las calles dejando un saldo de cientos de muertos.

El golpe de Natusch emergió del impase político creado por las elecciones de 1979, pero existieron otros factores que lo precipitaron. Específicamente, la clara intención de la izquierda de que se investigue el comportamiento de las fuerzas armadas durante el régimen de Banzer. Aunque los militares no podían dominar y gobernar, todavía podían invalidar cualquier amenaza a su institución y, por lo tanto, definir los límites externos de la conducta "democrática".

En todo caso, el Congreso, que en primera instancia había denunciado a Natusch y apoyado a Guevara, rápidamente dejó de respaldar a Guevara y buscó un compromiso que, al menos, no afectara al

propio Congreso. El resultado fue, otra salida por medio de la cual, tanto Natusch como Guevara, tuvieron que replegarse en favor de otro presidente interino. Otro producto del MNR original, Lydia Gueiler, asumió la presidencia, y se convirtió así en la primera mujer presidente de la historia boliviana.

A pesar del corto periodo que tenía para gobernar, la nueva presidente trató de llevar a cabo un gobierno viable. Específicamente, a fines de noviembre, Gueiler implantó un paquete económico del Fondo Monetario Internacional con el fin de lograr algunos préstamos internacionales. Las medidas de austeridad recayeron fuertemente sobre los sectores laborales y populares. Aun cuando la COB reafirmó su apoyo al gobierno y al sistema democrático, esta organización inició una protesta abierta en contra de dicho paquete económico.

De nuevo se puede observar una importante contradicción. La realidad económica era tal, que si Bolivia aspiraba a mantenerse dentro del sistema occidental, tendría forzosamente que adaptarse a las condiciones del FMI. Cualquier paquete fondomonetarista de todas formas provocaría la oposición por parte de los trabajadores y de la izquierda en particular. Así se presentó un claro contraste entre la lógica "popular" de cualquier tipo de sistema democrático y/o un gobierno civil, y la lógica "antipopular" de cualquier programa de estabilización. El nuevo régimen trató de imponer costos sociales dentro de un contexto democrático, cosa que durante los 20 años previos había demandado un gobierno autoritario fuerte.

Aparte del programa económico, el gobierno de Gueiler buscó presidir la reconstrucción del sistema político al convocar nuevas elecciones para junio de 1980. Con el pasar de las semanas, Gueiler se vio envuelta en una confrontación abierta con el Comandante del Colegio Militar, el general Luis García Meza. Nuevamente, los militares estaban reaccionando ante las

acusaciones recientes en el seno del Congreso. A pesar de este "mal presagio", las elecciones se llevaron a cabo en la fecha fijada.

Las elecciones no fueron más que una copia de las de 1979, con los mismos candidatos y coaliciones políticas, y con el mismo resultado; ningún candidato logró la mayoría absoluta, por lo tanto, la situación política se mantuvo igual. No obstante, hubo una notable declinación en la votación por el candidato de la centro-derecha en favor de Siles Zuazo que esta vez logró 38 o/o del sufragio contra 18 o/o de Paz Estenssoro y 14 o/o de Banzer. El voto reflejó la esperanza de que el "populista" Siles aliviara el peso de las medidas de austeridad sobre los sectores populares. El Congreso, dividido y sin la clara mayoría de algún partido o coalición, tendría nuevamente que decidir el resultado de las elecciones.

Antes de que el Congreso pudiese llegar a alguna resolución, García Meza, el 17 de julio, tomó el poder. En muchos aspectos, el régimen de García Meza confirmó el agotamiento del sistema político boliviano. A pesar de su gran retórica, el régimen no tuvo una tendencia o forma ideológica clara.¹³ El régimen se movilizó para aplastar a la fuerza trabajadora, y fue igualmente brutal con toda la oposición. Evidentemente, una de las características de este régimen fue su sistemática brutalidad, buscando estremecer e intimidar a toda la sociedad. El hecho es que el gobierno no tuvo apoyo significativo de ningún sector social. Como resultado, fue un régimen débil que tuvo que mantenerse en el poder por medio de la fuerza.¹⁴

Debido a sus nexos con el tráfico de cocaína, y a sus descarados actos de corrupción, el régimen de García Meza logró rápidamente el rechazo internacional. Terminó siendo poco menos que un gobierno parasitario saqueando abiertamente a una nación atemorizada. Mas ominosamente, el régimen vio el deterioro final del ejército que se convirtió en poco más que una

colección de (warlords) predatorios, parcelando pedazos del Estado y del patrimonio nacional entre ellos. Nuevamente, la institución como tal era, en extremo débil, como se evidenció al hacer uso el régimen de grupos paramilitares para dominar a la sociedad. Bajo García Meza, la economía se deterioró hasta el punto de llegar al colapso, mientras el general y su pandilla pasaban el tiempo dividiendo el producto del pillaje entre ellos en vez de tratar de gobernar.¹⁵

A mediados de 1981, oficiales institucionalistas depusieron a García Meza y buscaron negociar a las Fuerzas Armadas fuera del poder. Bolivia optó por la democracia porque era su única alternativa. En aquellas circunstancias, no existía la capacidad necesaria para montar un gobierno autoritario. Los militares no fueron ni siquiera capaces de dictaminar los términos de su retirada, y los civiles se quedaron con la tarea de buscar otra salida.

La solución fue ingeniosa, pero reflejó el dilema político básico en Bolivia. Temerosos ante la posibilidad de nuevas elecciones que pudiesen alzar la marea hacia Siles, los partidos claves acordaron reconvenir el Congreso de 1980, que posteriormente podría elegirlo. Esta salida, le negó al país la habilidad de montar un gobierno con un mandato para gobernar y garantizó una bifurcación antagónica entre un ejecutivo débil y un Congreso más o menos controlado por una oposición de fracciones divididas entre sí. Fue otra salida momentánea, basada en la creación de una tendencia a largo plazo hacia el inmovilismo dentro del sistema.

El proceso de transición que comenzó en 1977, culminó en octubre de 1982, cuando Hernán Siles Zuazo asumió la presidencia. Parecía ser un momento favorable. Los militares se encontraban desacreditados, y el grueso de la población favorecía claramente el retorno a la democracia. Finalmente, el gobierno de Siles había demostrado que contaba con un amplio apoyo popular, especialmente, entre

los trabajadores y el campesinado .

Ai mismo tiempo, el nuevo gobierno y el nuevo sistema democrático se enfrentaron a las enormes dificultades económicas que se manifestaron en una gigantesca deuda externa per cápita, tasas de crecimiento declinantes, inflación y un tesoro nacional en bancarrota. Más aún, quedaba claro que, a menos que el gobierno estuviese dispuesto a intentar un viraje hacia el bloque socialista, cualquier intento de negociación para lidiar con la crisis económica tendría que ajustarse a los requerimientos del FMI y sus demandas de estrictas medidas de austeridad. Pero tal plan sería, entonces, impopular entre los grupos claves que apoyaban al gobierno, especialmente, el sector obrero-sindical.

Fatídicamente, la COB siguió la misma estrategia política que mantenía desde comienzos de los años cincuenta. En principio, apoyó al gobierno de la UDP de Siles, pero se negó a formar parte del mismo bajo otras condiciones que no fuesen las de un co-gobierno mayoritario a nivel nacional y en todas las entidades públicas principales. Cuando sus demandas de co-gobierno fueron rechazadas, la COB asumió una postura independiente a la izquierda del gobierno, desde la cual le ofreció al gobierno sumisión pasiva sólo en caso de que sus demandas fuesen atendidas. Al fracasar en ese plan, la COB declaró abiertamente que intentaba negociar autónomamente con el régimen mediante acciones directas coercitivas para obligar al gobierno a implementar sus programas.

A la derecha del gobierno estaba la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) la cual, por vez primera, asumía el papel de vocero del sector privado. La CEPB, que nunca había apoyado a Siles, lo presionó para que sus políticas tuvieran una orientación más de mercado, y de esta manera, "defenderse" de las políticas populistas y de izquierda promovidas por la COB y algunos de los miembros de la coalición de gobierno.

Llegado a este nivel, los asuntos políticos prioritarios implicaban, como en la mayoría de los países de la América Latina, una política de paquetes económicos diseñados pensando en el FMI. Si les trató de implementar ocho paquetes, pero todos fracasaron. El hecho es que los paquetes diseñados por tecnócratas, generalmente fueron diluidos a través de negociaciones en la coalición de gobierno. La COB, entonces, dirigía la lucha en contra de cada paquete, y luego de una ronda de huelgas, el gobierno se veía obligado a ceder. A esas alturas, la CEPB montaba sus campañas amenazando con sus propias huelgas si no se hacía algo. En cierto sentido, la batalla se dio entre la COB y la CEPB, en la cual el gobierno se convirtió en una especie de cubierta halada y empujada por ambas fuerzas, pero sin recibir el apoyo político de ninguna de las dos partes. La táctica fue ver quién podía ejercer efectivamente más coerción sobre el gobierno y por cuánto tiempo.¹⁶ Indudablemente, desde 1982, esta situación se ha convertido en la forma dominante de hacer política a todo nivel. El principal legado político del período militar fue el completo deterioro de la capacidad política para canalizar la estructura y contener las relaciones entre el Estado y la sociedad, y entre las partes de la sociedad entre sí. Carente de infraestructura, la gran cantidad de demandas largamente embotelladas por la represión militar irrumpió irremisiblemente.

No sólo la COB y los grupos empresariales, sino también los grupos regionales, campesinos, empleados públicos, etc., hicieron peso con sus demandas, las cuales iban en contra de la lógica de cualquier programa económico presentado por el gobierno. Todos los grupos, fragmentos y sectores respaldaron sus demandas con acciones coercitivas concretas, como huelgas, bloqueos de carreteras, el cierre de regiones enteras, etc. En un corto periodo de tiempo, el gobierno pasó de una mini-crisis a otra, mientras iba simplemente ce-

diendo a las demandas hechas sobre él.

La manifestación económica, más inmediata de la incapacidad del gobierno, fue la inflación, que en este momento, es una de las peores del mundo. La tasa de inflación subió a mucho más de mil por ciento, mientras que la moneda nacional sufrió devaluaciones astronómicas. En 1983, la tasa oficial de cambio era de 200 pesos por dólar mientras que la tasa en el mercado paralelo era de 800. En julio de 1985, la tasa oficial llegó a 75,000 mientras que la paralela sobrepasó los 800,000 pesos por la divisa norteamericana. Tras la inflación se encontraba un gobierno secuestrado por segmentos de la sociedad civil, simplemente enfrentando las demandas en base a emisiones monetarias inorgánicas, y de esta manera embarcado en un complejo juego de cavar un hoyo para tapar otro.¹⁷

Aparte del cuasi-soberano comportamiento de organizaciones como la COB y los comités cívicos regionales, la debilidad del gobierno reflejó la debilidad de las instituciones políticas claves. Una debilidad crítica fue la plétora de partidos políticos fragmentados, que al final eran sólo capaces de canalizar demandas pero no soporte para un gobierno. En esta etapa, los partidos políticos en Bolivia son, en su mejor forma, vehículos para montar coaliciones electorales y asaltar los recursos de patronaje del Estado. No son capaces de generar apoyo para un proceso gubernamental, ya sea vinculando al gobierno con una base estable de apoyo en el Congreso o canalizando y controlando el respaldo de grupos, regiones, y clases claves. En pocas palabras, los partidos políticos no median entre el Estado y la sociedad civil ni tampoco actúan como anclaje para agregar demandas y apoyos de la sociedad dirigidos al Estado y a regímenes específicos.

En términos de apuntalar la democracia, está claro que en Bolivia ha habido y aún existe una división entre democracia como elecciones y democracia como gobierno. Las coaliciones que se forman

para competir en las elecciones no pueden ser mantenidas como coaliciones para gobernar y controlar. La coalición de la UDP, por ejemplo, se ha desmoronado, fragmentado y ha sido reconstituida constantemente desde 1982. En consecuencia, la propia estructura del poder ejecutivo ha sido cuestionada, y Siles Zuazo ha gastado una cantidad considerable de tiempo y de energías tratando de manipular a los partidos y fracciones que lo rodean.

Al mismo tiempo, el ejecutivo y el Congreso han mantenido una rivalidad permanente. El problema no ha sido que una oposición unificada domine la Asamblea Legislativa, sino que el gobierno, ha sido incapaz de mantener un bloque de partidarios disciplinados. El resultado ha sido un Congreso dominado en forma negativa, de facto, por una oposición fragmentada. Así, el Congreso no se ha opuesto a través de contra-propuestas, sino simplemente obstruyendo cualquier movimiento que el ejecutivo pretenda efectuar. Como resultado, el ejecutivo ha buscado gobernar sin la ayuda de la Asamblea Legislativa, y por lo tanto, técnicamente, ha sido forzado a actuar ilegalmente, por encima de sus atribuciones. Pero la realidad es que, dado el hecho de que las instituciones no están operando en la forma prescrita, entonces, todos han incurrido en acciones ilegales o extralegales, simplemente con la finalidad de poder hacer algo.

Una de las debilidades estructurales del presente sistema es que las regulaciones e instituciones formales son percibidas no como vías para lograr algo, sino como factores que obstruyen cualquier acción. En consecuencia, la disposición a respetar y seguir las reglas formales va en descenso, no sólo entre grupos de la sociedad civil, los cuales rutinariamente "infringen la ley" para conseguir sus fines particulares, sino también, entre todas las ramas del gobierno. Así, el Congreso acusó a Siles de actuar ilegalmente a lo largo de su período de gobierno mientras debatía golpes constitucionales y otros métodos para

enfrentarse al ejecutivo. Dada la incapacidad del Congreso y los partidos que lo integran, los grupos sociales lo ignoraron y buscaron influir directamente al ejecutivo. Finalmente, Siles gobernó, casi siempre, por decreto y frecuentemente actuó en formas que si bien se pueden considerar substancialmente correctas, eran formalmente ilegales. Uno de los ejemplos es la reciente nacionalización de una compañía minera, la cual todos están de acuerdo, había violado una serie de leyes. El gobierno, prevenido de que la Corte pudiera hacer el caso interminable, provocó un corto circuito en los procedimientos legales correctos y simplemente terminó por apoderarse de las minas. De aquí que las asociaciones del sector privado atacaran al gobierno, no por la nacionalización como tal, sino por la forma "ilegal" en que ésta fuera llevada a cabo.

A lo largo de su período, el gobierno de Siles ha gastado la mayor parte de sus energías tratando de mantenerse en el poder formal. Este régimen ha sido incapaz de gobernar en ningún sentido positivo y ha actuado principalmente en respuesta a los embates y jalones de las fuerzas sociales. Bajo el gobierno de Siles, el ejecutivo, y por extensión el Estado, han "flotado" en forma inconexa y por encima de la sociedad civil, donde aparecen como mecanismos flexibles a la voluntad de grupos, o de los cuales tienen que protegerse. Los grupos y segmentos de la sociedad claramente perciben la política como un juego de suma cero, en el cual cada quien ha de actuar más frecuentemente con la finalidad de bloquear a los oponentes, que con la idea de ejercer presión sobre los intereses positivos propios. Actualmente, Bolivia es un caso extremo de inadecuación entre la lógica de un bien nacional general a largo plazo, y la de los bienes específicos, a corto plazo, de los grupos particulares, clases y regiones.

En el tipo de situación en la que se encuentra Bolivia, el peso de las circunstancias refuerza la lógica particularista y

por lo tanto, genera un círculo vicioso. Las pérdidas potenciales de la lógica a corto plazo son tan grandes que ningún grupo o segmento se atreve a actuar de otra manera que no sea la de defender sus propios intereses. El Estado, en cambio, el cual ostensiblemente articula un interés general por la vía de gobiernos específicos, es una entidad que, aún cuando en Bolivia es grande en tamaño y significado, en términos prácticos es muy débil.

El resultado de toda esta situación ha sido un standoff en todas las direcciones, y el mayor logro del gobierno de Siles dependerá de su habilidad de entregar el poder en agosto de 1985, al gobierno civil elegido, es decir para de esta manera preservar la forma democrática. Si Siles es capaz de hacer esto dentro de las circunstancias vigentes, habrá logrado un primordial y significativo alcance político.

Los pronósticos sobre la democracia en Bolivia son pesimistas. Hasta este momento la democracia ha persistido porque los militares y los modelos autoritarios están debilitados. Mientras crezca el desorden y los recuerdos se desvanezcan, la prominencia de estos factores también

desaparecerá. El factor crítico se encuentra en la manera en que las élites, tanto de la sociedad civil como de la institución militar, perciban la situación. Por el momento podríamos argumentar que las élites respaldan los procedimientos democráticos, no por razones de compromisos positivos para con ellas, sino como opción sobre la cual se han apoyado con el fin de perder menos, y, lo que es más importante, con el fin de mantenerse dentro del juego. En el momento en que algunos de los grupos se perciban a sí mismos como marginados dentro del juego democrático, seguramente buscarán como salida política un gobierno de facto. En la reciente campaña electoral, por ejemplo, la COB, viendo la posibilidad de una gran victoria electoral para la "derecha" abiertamente consideró la alternativa de propiciar un golpe para rechazar lo que ella llamó un golpe electoral de la derecha. El problema real es que los compromisos de las élites con respecto a la democracia formal son, en el mejor de los casos, sólo tentativos.

Traducción de María Teresa Romero

NOTAS

1. Véase a James Malloy, *Bolivia: The Uncompleted Revolution*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1970, para mayor desarrollo del análisis presentado aquí.
2. Véase a Susan Eckstein, *The Impact of Revolution: A Comparative Analysis of México and Bolivia*, Londres. Sage Publication, 1976, po. 24-39, para un análisis detallado de ambas revoluciones.
3. Un análisis breve de este período se encuentra en James M. Malloy, "Revolutionary Politics", en Malloy y Thorn, ed. *Beyond the Revolution Bolivia Since 1952*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1971.
4. Véase el análisis detallado del período de Torres y la Asamblea Popular de Jerry Knedson, *Bolivia's Popular Assembly and the Overthrow of General Juan José Torres*, Buffalo: State University of New York, Special Studios Series, 1974.
5. Véase Guillermo O'Donnell *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics*, Berkeley Institute of International Studies, 1973.
6. Véase el libro de Gary Prado Salmón, *Poder y Fuerzas Armadas 1949-1982*, La Paz, Editorial Los Amigos del Libro, 1984, para una versión de las divisiones y enfrentamientos dentro de la institución militar durante este período.
7. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, *Anuario de Estadísticas de Trabajo*, La Paz:

- Instituto Nacional de Estadísticas 1980, 1981 y *Estadística Laboral Periodo 1970-1975*, La Paz. Instituto Nacional de Estadísticas, 1976.
8. Véase el análisis de Pablo Ramos, *Siete Años de Economía*, La Paz: Ediciones Puerta del Sol, 1982.
 9. Véase José Luis Roca, *Fisionomía del Regionalismo Boliviano*, La Paz: Amigos del Libro, 1980, para un análisis detallado de los problemas regionales y el crecimiento del poder político de los comités cívicos.
 10. Uno de los principales conspiradores en el golpe de noviembre de 1979, Guillermo Bedregal, confirmó esta versión. Véase su relato publicado en *El Diario*, 9 de febrero de 1980, p. 3.
 11. Véase el libro de Irving Alcaraz, *Prisionero del Palacio*, La Paz: Editorial e imprenta Amerindia, 1983. Alcaraz desarrolló la versión más controvertida pero a la misma vez aceptada.
 12. Véase Walter Guevara Arce, *"Los Militares en Bolivia"* manuscrito inédito, 1980, para la versión del ex-presidente sobre estos acontecimientos.
 13. Muchos han argumentado que García Meza siguió un programa ideológico, véase por ejemplo el análisis de Pablo Ramos, *Radiografía de un golpe de estado*, La Paz: Editorial Puerta del Sol, 1983.
 14. Véase James M. Malloy *Bolivia the Sand and Corrupt End of the Revolution*, UFS: Reports, 1982, para un análisis más detallado del régimen de García Meza.
 15. *Ibid.*
 16. Véase Raúl Rivadeneira Piada, *Bolivia: Un país en permanente estado de emergencia*, La Paz, Cinco, 1984. Prada hace un análisis detallado del ciclo de huelgas y paros entre octubre de 1982 y junio de 1983. En ese período hubo 544 paros o huelgas, 84 de los cuales fueron a nivel nacional. Sin entrar en especulaciones, es probable que esta situación se duplicara entre junio de 1983 y julio de 1985.
 17. Véase Diego Estevez, *"Hiperinflación, drama actual de Bolivia"*, mayo de 1985, en *Última Hora* 16, 17 y 21 de mayo de 1985 para un análisis de la economía boliviana en los últimos tres años.